

Retos para el logro de una participación ciudadana institucional

Cynthia Raquel Nieto Lizárraga

A medida que aumenta la capacidad del Estado para controlar a los ciudadanos, debería aumentar la capacidad de los ciudadanos para controlar al Estado.

NORBERTO BOBBIO

Los gobernantes que son electos por la ciudadanía experimentan hoy en día nuevas formas de control político e institucional por parte de ella, y al mismo tiempo, nuevas búsquedas en el ejercicio de la participación ciudadana. Es por esto que en una sociedad cada vez más interesada en integrar activamente al mayor número de ciudadanos posibles, sería un gran error no darle la adecuada importancia al voto, como símbolo del sistema representativo en las democracias pluralistas de partidos políticos.

Dicho derecho, se ha ido modificando a través de las épocas y ha sido reglamentado de muy diversas maneras, sin embargo en nuestros tiempos, ha sido actualizado como resultado de distintas presiones provenientes de la sociedad civil, en consecuencia de una búsqueda de mayor participación en los asuntos públicos con una mayor representatividad de otros sectores tradicionalmente marginados del poder público, como son las mujeres, la población indígena, la juventud.

Todo esto en función de que la ciudadanía ha optado por expresar sus dudas y apatías hacia la política y hacia el ejercicio de sus derechos ciudadanos, principalmente enfocados hacia el sistema judicial y la seguridad pública. Pero esto no sería posible sin la presencia de un sistema político democrático, el cual puede estar enfocado a escenarios colectivos interrelacionados, como la democracia política, la democracia económica y la democracia

social. Se han desatado numerosos consensos que plantean el desencanto, la falta de credibilidad y el escepticismo de parte de los ciudadanos que hacen vulnerable y precaria la legalidad del sistema democrático.

Cuando los líderes y representantes políticos pierden la credibilidad y son cuestionados abiertamente por los ciudadanos, la sostenibilidad del sistema democrático se hace vulnerable. Ese conjunto de aspectos negativos pone en evidencia la necesidad de una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones gubernamentales y en la transformación democrática de los partidos políticos, para el pleno ejercicio de los derechos de la ciudadanía política.

La democracia moderna se centra en la existencia de derechos y garantías que conforman el binomio de protección jurídica de los habitantes del estado respecto al poder de éste. Entendiendo por derechos los intereses socialmente relevantes protegidos por normas jurídicas; y por garantías los mecanismos a manos de los administrados que les permiten hacer valer esos derechos.

También se debe de hacer hincapié en los derechos ciudadanos, los cuales se encuentran indisolublemente unidos a la democracia, y discurren en el ejercicio de las prácticas de gobierno, mediante procesos de formación de opinión popular en las que coinciden criterios diversos a fin de conformar una opinión pública mayoritaria, respetándose y reconociéndose siempre las opiniones de las minorías discordantes.

De esta noción nace la expresión de “participación ciudadana” que se entiende como la serie de actividades voluntarias practicadas por miembros de una comunidad, con el propósito de obtener resultados en la vida social. La existencia de la ciudadanía depende de tres factores esenciales: 1) el estado de derecho; 2) un espacio público de expresión; y, 3) las condiciones materiales mínimas para su despliegue, que incluyen las posibilidades culturales e informativas.

El concepto de ciudadanía surge a partir de los años 50 como una opción para vincular a los ciudadanos con el Estado de un forma más estrecha. Dicha opción, nació como resultado de numerosas discusiones entre las teorías políticas y sociales que reconocen a los miembros de la sociedad como individuos con derechos, pero al mismo tiempo también, con obligaciones.

La necesidad de construir este vínculo se debe principalmente a dos factores: 1) la necesidad de equilibrar en lenguaje jurídico, tanto los derechos como las obligaciones y responsabilidades de los ciudadanos; y, 2) a la creciente necesidad de los ciudadanos de ser escuchados por el Estado, es decir, de hacer oír su voz sobre todo aquello que les afecta directamente. Ante estas necesidades, el Estado identifica tres factores principales que vuelcan su atención hacia una respuesta adecuada a las necesidades de los ciudadanos: 1) los problemas que se generan en la esfera social debido al choque ideológico entre las diferentes corrientes políticas que surgen dentro de este mismo; 2) la creciente insatisfacción de los ciudadanos ante el funcionamiento del sistema político democrático, debido a las preocupaciones por la calidad de vida y las limitaciones dentro de las supuestas democracias; y, 3) el surgimiento de un nuevo actor político que cada día es más activo y que se involucra dentro de las diversas esferas que integran la sociedad.

Haciendo referencia al modelo clásico de ciudadanía, podemos encontrar que anteriormente se creía que el Estado tenía el poder de condenar a los individuos a la pasividad, con el pretexto de la carencia de espacios donde pudieran intervenir directamente en los asuntos de su comunidad.

Ante dicha situación, la relación entre los ciudadanos y el Estado poco a poco fue impulsando a los primeros a delegar en el Estado la solución de la mayor parte de sus problemas, aun y cuando estos problemas fueran de índole social, que más bien eran percibidos como asuntos personales, cuyas soluciones debían recaer principalmente en los propios individuos.

En consecuencia a la acusación de pasividad del Estado sobre los ciudadanos y sobre las consecuencias negativas que se derivan en la integración social de ambas partes, fue necesario llegar a una nueva etapa de debate y reflexión sobre el replantamiento de la posición de los ciudadanos ante la posibilidad de participar en innumerables áreas de la vida política y social, así como de sus capacidades para influir activamente en la política, convirtiéndose en actores de esta misma.

En los últimos años ha cambiado drásticamente el modelo clásico de la ciudadanía; actualmente, el individuo opta por ir a la par de la modernidad y la tecnología, dando como resultado una pérdida de interés sobre las tradiciones y costumbres de la vida

cotidiana. Y en vez de modelos definidos de comportamiento, tiene que estar tomando decisiones sobre su vida constantemente, lo que a la larga no ajusta adecuadamente en los procesos secuenciales rígidamente establecidos.

La aparición de este nuevo tipo de actor político, es decir de un ciudadano más reflexivo, que decide ser más activo en el espacio público, lo hace de una manera diferente a lo que se tiene establecido. Este tipo de actor político sólo participa en función de los temas concretos que sean de su incumbencia, y no de manera constante y uniforme. Sin embargo, el predominio de los derechos y el olvido de los deberes cívicos constituye el principal tema de debate sobre si el funcionamiento de una participación ciudadana reflexiva es adecuada.

Todo esto debido a que los individuos se convierten en los responsables de su bienestar y de su familia, tomando un papel activo, a través del cual ponen en práctica sus deberes sociales. Lo importante de esto es que no sólo se transforma el lenguaje, que anteriormente se encontraba enfocado en los derechos, si no que tiende a girar en torno a las obligaciones, provocando cambios en los temas que se toman en cuenta, así como también la perspectiva desde la que se valoran. Teniendo en cuenta que la vida cívica de las democracias más avanzadas exigen cada vez más un nuevo concepto de ciudadano, que esté más presente, que desarrolle actividades en su entorno colectivo y que se mantenga actuando interactivamente con las instituciones estatales, es decir, un ciudadano que se convierta en un agente de influencia política dentro de su comunidad.

Uno de los principales problemas es que el protagonismo cívico de algunos sectores de la sociedad, suponen un cuestionamiento radical de los principios de actuación de las élites políticas, sociales, económicas o culturales. Todo esto se puede resumir en que la idea de una ciudadanización activa es una forma de individualizar los problemas sociales y que a la larga traspa la responsabilidad colectiva desde el Estado hacia el individuo.

Como complemento del surgimiento del nuevo actor político, encontramos la subpolítica, que representa la extensión de la individualización en el terreno de lo político, entendida de una forma diferente a lo que es la política. La política tal y como tradicionalmente suele conocerse, experimenta un imparable proceso de degradación e inmovilismo. Pero al mismo tiempo se

cree en el renacimiento no institucional de la política, que trae como consecuencia el nacimiento de la subpolítica.

Dicha rama de la política está integrada por los agentes externos al sistema político o corporativo, a los cuales se les permite aparecer en el escenario del diseño social y, también de los individuos que compiten con estos últimos y entre sí por el creciente poder político. Este nuevo concepto permite configurar a la sociedad desde abajo, es decir, como consecuencia de la pérdida de capacidad implementativa y de la minimización de la política. Razón por la cual, grupos que no estaban implicados en el proceso de tecnificación e industrialización tienen cada vez más oportunidades de tener voz y participación en las distintas organizaciones de la sociedad.

La ciudadanía no es un tema que sólo interesa a intelectuales y especialistas en la materia sino que debe incorporarse al debate político, dada su trascendencia en múltiples aspectos de la vida social y la disparidad de enfoque que existe sobre el mismo. Dicho tema se encuentra estrechamente ligado a la expansión de los derechos y libertades individuales y con el surgimiento de los gobiernos democráticos.

De acuerdo a esto, tanto hombres como mujeres gozan de la posibilidad legal de participar, en igualdad de condiciones, en las dos dimensiones fundamentales que configuran sus derechos políticos como ciudadanos: la posibilidad de ser elegidos y de elegir. En las democracias perfectas existe la diferencia entre lo público y lo privado, lo que hace una enorme diferencia entre la esfera del poder político y la esfera de la vida doméstica.

El problema es, obviamente, la falta de libertad e igualdad entre los grupos, clases sociales, razas, sexos y edades que conforman la sociedad con respecto a la participación en el poder político. Por esto, el concepto de ciudadanía debe implicar una participación más vital y activa de todos los sectores de la población en la toma de las decisiones fundamentales de la sociedad.

Dicho ejercicio de la ciudadanía política, es una responsabilidad compartida tanto de la sociedad política, el gobierno, que debe cautelar que los espacios de interlocución política sean los convenientes, como también es responsabilidad de la sociedad civil, que debe tener la capacidad de organizarse para que sus demandas e intereses sean representados debidamente en el ámbito

político y en sus mecanismos de actuación. Las posibilidades e instancias reales de participación ciudadana en la defensa de sus libertades y sus exigencias en cuanto a la igualdad ciudadana con respecto a los demás y al Estado, es el principal tema de preocupación para los ciudadanos.

Si tomamos en cuenta que tanto México como los países del Tercer mundo, poseen grandes sectores de población empobrecidos y carentes de bienes y servicios materiales, sectores que son políticamente impotentes en cuanto a que no tienen condiciones psicológicas y culturales para desarrollar una autoapreciación de su existencia social y de realizar, en consecuencia, la defensa organizada de sus propios intereses.

Si bien se pretende generalizar y mejorar el funcionamiento de las estructuras normativas de carácter institucional que garantizan el Estado de derecho, por otra parte la participación política se encuentra restringida por las posibilidades de información y por las condiciones que confrontan distintos grupos sociales.

No se pueden ocultar las contradicciones que supone tratar de impulsar una mayor presencia de los ciudadanos en el ámbito de lo público en unas sociedades donde persisten importantes desigualdades en cuanto a derechos, poder e influencia. Unas desigualdades que, además, suponen en muchos casos una barrera infranqueable para el acceso a una ciudadanía plena.

El funcionamiento de la ciudadanía social dentro de la estructura institucional del Estado siempre será fuertemente cuestionada. La idea fundamental es que detrás de las formulaciones y textos normativos que reconocen el derecho de todos los ciudadanos a un nivel de bienestar que les permita una vida civilizada y cultivada, independientemente de su posición en el sistema de desigualdades sociales, se ocultan una serie de disfunciones y problemas que ponen en entredicho la propia idea de ciudadanía social, como por ejemplo, el crecimiento poblacional desmedido, el desempleo, las condiciones de extrema pobreza, la falta de cultura, educación y conocimiento, entre otras.

Los principales peligros que se derivan de esta forma de entender la ciudadanía en el Estado son evidentes. Por una parte, existe el riesgo de quiebra o de erosión de las bases morales sobre las que se sustenta la existencia del estado, estimulando las situaciones de dependencia respecto al sistema y eliminando los

incentivos para su participación en asuntos colectivos. Por otra parte, está el riesgo de la despolitización de la ciudadanía, ya que, prácticamente, el estado termina creando clientes a los que hay que satisfacer sus demandas. De esta manera, el ciudadano corre el riesgo de dejar de ser un individuo con derechos civiles y políticos integrante de una comunidad, para convertirse en un cliente particular del Estado, el cual proporciona servicios que sean adecuados a sus necesidades y demandas.

La ciudadanía es tanto un ideal a conseguir como una institución en movimiento, cuyo desarrollo puede ser evaluado conforme a una serie de criterios objetivos y su funcionamiento está sometido a un continuo proceso de redefinición en función de la evolución de los elementos institucionales, las prácticas políticas, los determinamientos estructurales, las condiciones económicas, los niveles culturales y educativos, entre otros. En otras palabras, si se quiere conocer con precisión la situación de la ciudadanía en un momento determinado más allá del ideal de ciudadanía que en cada momento histórico prevalezca en nuestras sociedades, es preciso analizar en detalle su dinámica social: es decir, cómo funciona en la realidad sociopolítica y cuáles son las consecuencias que se derivan de ello.

De esta forma, junto con las acciones individuales hay que incluir la movilización de los grupos y organizaciones sociales; el conjunto de prácticas de ciudadanía que se desarrolla en la esfera pública; los diseños institucionales que pretenden establecer una determinada relación entre pertenencias sociales, derechos y participación, el papel que juega el Estado, etc.

La ciudadanía activa es un reto a conseguir dentro de un entorno contradictorio que alienta su desarrollo pero al mismo tiempo establece barreras y límites por el protagonismo público y eficaz de los individuos. Ahora bien, después de exponer estas nociones, pasamos a los que son realmente los retos que enfrentan los individuos para una participación ciudadana institucional:

1. La falta de sentimientos de identificación con los partidos políticos establecidos: Esto quiere decir que la población no siente identificación ni afinidad con los partidos políticos. En gran parte de los casos se debe a que no tiene conocimiento de las ideologías que sustentan dichos grupos de presión, en otras ocasiones sucede que aunque sean de su conocimiento, es simplemente que no

tiene el interés de participar en asuntos políticos, porque piensa que es una pérdida de tiempo o que de nada sirve dedicarse a los asuntos que no tienen gran trascendencia. En mi opinión, los partidos deberían de hacer dinámicas de integración en donde no sólo los miembros activos tengan participación, sino también el público en general, para que de esa forma se vayan envolviendo poco a poco en las ideologías, y más adelante puedan formar parte de la población activa que participa en asuntos de interés para la comunidad. Otra gran desventaja es que no tienen confianza en los partidos y lo que es peor aún es que estos grupos cada día que pasa pierden más credibilidad, aunado a los escándalos y sucesos que se dan en el acontecer diario de la vida política nacional.

2. La falta de poder e influencia de los ciudadanos sobre las decisiones políticas: En este punto es muy importante decir que los ciudadanos se sienten totalmente excluidos de las decisiones gubernamentales; hoy en día se han dado casos en los que los gobiernos convocan al consenso público, pero en la mayoría de los casos, éstos no tienen el éxito esperado debido a que los ciudadanos tienen la idea de que aunque acudan a emitir su opinión a final de cuentas ésta no importa demasiado, debido a que el gobierno no siempre toma las mejores decisiones. Lo que deberían de hacer es buscar una manera de acercarse a la población para que ésta tenga confianza en sus gobernantes y en los procesos democráticos que se lleven a cabo para el beneficio común. También es de suma importancia, y quizá lo primordial, que el pueblo acuda ante estos llamados que surjan en el gobierno local, porque esa será la única manera de hacerse escuchar, participando activamente en las causas que signifiquen un beneficio comunitario.

3. Los cambios bruscos en los comportamientos electorales: Cada proceso electoral es causa de expectativa, tanto por causa de la población como de parte de los candidatos y demás involucrados en los procesos electorales. Anteriormente eran jornadas largas y cansadas, y generalmente casi siempre terminaban en trifulca pública. En la década de los 90 nace el Instituto Federal Electoral como mediador entre la población y los partidos políticos, dicho organismo es el encargado de desarrollar elecciones cada vez más limpias y organizadas. Sin embargo y a pesar de todos los esfuerzos realizados por este organismo, en la actualidad se sigue

dando el abstencionismo electoral, que en gran medida se debe a que durante las campañas políticas la gente queda desilusionada de los candidatos. Hay otras situaciones, como por ejemplo, que una persona sea afín con un partido pero que el candidato no llene sus expectativas y eso orille mejor al abstencionismo en lugar de un voto nulo. En las elecciones locales pasadas del año 2003, se dió el fenómeno de que la mayoría de los votantes fueron mujeres, lo que quiere decir que es uno de los sectores populares más participativos. Otro fenómeno relevante es que los jóvenes en edad para votar sí cuentan con su credencial para votar, pero la usan para entrar a lugares donde es requisito indispensable, para cobrar en los establecimientos bancarios, o para trámites en general, en dichas elecciones también se mostró un abstencionismo enorme por parte de la población joven.

4. La disminución de la confianza política de los ciudadanos en las instituciones públicas y en los políticos: A medida que pasa el tiempo la confianza y la credibilidad son dos valores que poco a poco han ido desapareciendo como características principales en la administración pública. Actualmente las instituciones públicas no gozan de muy buena reputación entre la población, un ejemplo muy latente es el Instituto del Seguro Social, que tras todos los paros, manifestaciones y huelgas que han realizado últimamente, lo único que han logrado es la desilusión colectiva. En suma, a que antes de todas esas situaciones dicha institución no era reconocida por brindar la mejor atención o por satisfacer las necesidades de los asegurados. No se puede culpar del todo a la institución, gran parte de la culpa la tiene el gobierno por no poner orden y hacer lo posible por arreglar esta situación, si bien son problemas internos, no debería de afectarse a la población, que a final de cuentas es la menos indicada para sufrir las consecuencias de conflictos ajenos a sus conveniencias.

5. La reducción del interés político e incremento de los niveles de apatía política: Es aún más contradictorio cuando los ciudadanos activos políticamente dejan de hacerlo a causa de la desilusión o de otros factores que motivan que dejen de dedicar su tiempo e interés en asuntos benéficos para su entorno. La educación cívica es algo que empieza en la propia casa, dentro de la familia, es decir, si en el propio círculo familiar no hay la cultura

de acudir a votar, del respeto por las autoridades, de participar y de tratar de buscar el bien común para su entorno, no se puede pretender que las nuevas generaciones hagan algo que no se les inculca, o peor aún que no les interese debido a que la llamada Generación X está más preocupada por otros aspectos superficiales de la vida. Dicha generación a medida que pasan los años pierde más el interés en los asuntos políticos, porque la tecnología y la ciencia que avanzan desmedidamente, los mantiene ocupados, lo adecuado sería encaminar a la juventud hacia la participación en grupos y asociaciones con las que sientan pertenencia y se identifiquen, para que en lugar de hacer las cosas por obligación lo hagan por gusto y de esa forma indirectamente estarán ayudando en el desarrollo del país.

6. La disminución del grado de implicación colectiva en organizaciones de carácter político: Retomando un poco el tema anterior, entre menos identificación sienta una persona por una causa menos será su sentido de pertenencia ante dicha causa. Mientras no se den organizaciones, instituciones o grupos que realmente atraigan la atención por los logros alcanzados o, ya bien, por la capacidad que alcancen para ayudar a un gran número de personas, la participación ciudadana no superará las expectativas deseadas. No se debe dejar esta labor solamente en manos del gobierno, sino que ciudadanos más comprometidos con las causas deberían de encargarse de enlazar a otros ciudadanos con la única y total finalidad de buscar el bien común de su entorno. Debe de tomarse en consideración que el surgimiento de organizaciones en pro de la comunidad y de mejorar la administración pública local, son de primordial importancia dentro de los procesos democráticos de un país.

Algunas opciones para motivar la participación ciudadana podrían ser:

1. Voluntad compartida de defender el patrimonio local (natural, histórico, cultural): Los ciudadanos deberían de unirse en comités o frentes que defiendan cada una de las riquezas encontradas en su localidad, como puede ser el patrimonio natural, ríos, lagos, montañas, parques recreativos, etc; el patrimonio

histórico, museos, monumentos, etc; y el patrimonio cultural, como leyendas, escritores, música, artes, etc.

2. Obras que acerquen a la ciudadanía con la administración pública local: Y no sólo obras públicas, sino obras humanitarias que hagan ver a los políticos como gente cercana e igual a los ciudadanos, para que crezca la confianza y la credibilidad en los procesos de la administración pública. De esta manera se crean lazos más estrechos de los cuales puede surgir cooperación mutua para alcanzar el bien común de la población en general.

3. Voluntad de concertar intereses sobre la prestación de servicios públicos municipales: Es obligación del municipio brindar los servicios públicos que cubran las necesidades esenciales de los ciudadanos, como agua potable y alcantarillado, alumbrado público, recolección de basura, limpia de mercados, calles, parques y jardines. Acciones que forman parte de los llamados servicios públicos y que junto con la seguridad pública, son los principales problemas entre la población y los gobernantes. Mucho se ha dicho sobre si es necesario descentralizar estos servicios y otorgárselos a la empresa privada, sin embargo éste sería un problema más con los intermediarios y una forma de *lavarse las manos* diplomáticamente del gobierno. Si bien es cierto que tal vez podrían mejorar los servicios, lo mejor sería que el municipio tratará de mejorarlos en lugar de ceder concesiones a particulares.

A modo de conclusión podemos decir que la participación ciudadana es un concepto, que si bien no es llevado al pie de la letra, al menos se tiene conocimiento de que existe y de que es un factor de suma importancia dentro de los gobiernos democráticos.

Ahora bien, si no es practicado por la mayoría de los ciudadanos integrantes del Estado, es porque aún el gobierno no ha encontrado la forma de convocar a un gran número de personas para que se interesen por los asuntos que son relativos a su comunidad y a la búsqueda del bien común para su localidad. Si tomamos en cuenta que a últimas fechas han surgido problemas que ya se encuentran fuera del alcance del gobierno, aunado a la falta de confianza y credibilidad, es de entenderse que la ciudadanía se encuentre a la expectativa.

La única manera de lograr que los ciudadanos participen activamente será buscar causas con las que se sientan identificados, situaciones en donde la satisfacción de sus necesidades sea primordial o asuntos de interés general, pero que representen beneficios particulares al mismo tiempo. Y si bien, ésta es la clave para lograr una ciudadanía, también el Gobierno debe de participar un poco en este proceso, dicho apoyo podría ser acercándose a los ciudadanos en un trato más humano y de igual a igual, propiciando eventos en donde la convivencia y las actividades estén enfocadas en asuntos de la comunidad. Sólo conjuntando esfuerzos y teniendo un gobierno más transparente se logrará que los ciudadanos se integren activamente en el desarrollo del país.
